

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que don Francisco Javier Grandón Zambrano, abogado, en representación de doña Patricia Cisternas Muñoz, demandante en los autos sobre despido injustificado y cobro de prestaciones, del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, ministros señor Jame Solís Pino y señoras Vivian Toloza Fernández y Verónica Esquerré Pavón, por haber dictado con falta o abuso la resolución de cuatro de marzo del año en curso, por medio de la cual confirmaron la que no dio curso a la demanda en procedimiento de aplicación general y ordenó su ingreso como monitorio.

Señala que en virtud de lo dispuesto en el artículo 498, inciso 2°, del Código del Trabajo, siempre existe la posibilidad de accionar de conformidad con el procedimiento de aplicación general, vía procedimental que se tomó teniendo en consideración que si se acudía al monitorio la acción indefectiblemente estaría caducada.

Segundo: Que, en su informe, los jueces recurridos exponen que estimaron que lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 498 del Código del Trabajo sólo dice relación con el procedimiento administrativo a que hace referencia el artículo 497 del mismo cuerpo legal, establecida la carga previa de comparecer ante la Inspección del Trabajo, no siendo una norma de derecho común que pueda ser aplicada a la sede judicial.

Tercero: Que el arbitrio procesal que ocupa estas reflexiones se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "*De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales*", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "*Las facultades disciplinarias*" y, sobre el particular, el inciso primero del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales estatuye: "*El*



recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias. Se exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el recurso de queja, además del recurso de casación en la forma".

Cuarto: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso de queja es menester que el tribunal haya dictado una resolución cometiendo falta o abuso grave, esto es, de mucha entidad o importancia, único contexto que autoriza aplicarle una sanción disciplinaria que debería imponerse si se lo acoge. Según la doctrina, con dicha forma de concebir el referido recurso "...se recoge el interés del Ejecutivo y de la Suprema de limitar la procedencia (sólo para abusos o faltas graves), poniendo fin a la utilización del recurso de queja para combatir el simple error judicial y las diferencias de criterio jurídico..." (Barahona Avendaño, José Miguel, *El recurso de queja. Una Interpretación Funcional*, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40).

Por lo tanto, se puede concluir que no es un medio que permita refutar cualquier discrepancia jurídica o errores que un juez haya cometido en el ejercicio de la labor jurisdiccional. Dicha postura es la que esta Corte ha adoptado de manera invariable, según consta, entre otras, en las sentencias dictadas en los autos número de Rol 10.243-11, 1701-2013 y 3924-2013 de 11 de enero de 2012, y de 23 de marzo y 28 de agosto, ambas de 2013, respectivamente.

Quinto: Que esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura,



entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, *Los recursos procesales*, Editorial Jurídica, Santiago, año 2010, p. 387). También cuando una determinada norma legal se ha interpretado sin considerar los principios que la informan, en concreto el de protección, cuya manifestación es el "*in dubio pro operario*".

En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir "faltas o abusos graves" cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la "trascendencia", y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia. (Barahona Avendaño, José Miguel, *El recurso de queja. Una Interpretación Funcional*, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sexto: Que del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional se aprecia lo siguiente:

a.- El 21 de enero de 2022 doña Patricia Cisternas Muñoz presentó reclamo ante la Inspección del Trabajo en contra de Jumbo Supermercados Administradora Limitada fijándose audiencia de conciliación para el 24 de marzo del mismo año;

b.- Por presentación de 22 de enero de 2022 doña Patricia Cisternas Muñoz dedujo demanda en procedimiento de aplicación general por despido improcedente y cobro de prestaciones en contra de Jumbo Supermercados Administradora



Limitada, haciendo presente que renunciaba a tramitar el juicio de acuerdo al procedimiento monitorio atendida la fecha para la cual se fijó la audiencia de conciliación ante la Inspección del Trabajo;

c.- Por resolución de 25 de enero de 2022, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, no dio curso a la demanda en procedimiento de aplicación general teniendo en consideración la cuantía de lo disputado, y, atendido lo dispuesto en el artículo 429 inciso 2° del Código del Trabajo ordenó su reingreso según las normas del procedimiento monitorio;

d.- Apelada dicha decisión, el tribunal de alzada la confirmó.

Séptimo: Que la interpretación efectuada por la magistratura priva al trabajador que reclama ante la Inspección del Trabajo y demanda por una suma igual o inferior a diez ingresos mínimos mensuales de toda posibilidad de accionar judicialmente, cuando, como ocurre en la especie, la audiencia de conciliación fue fijada por la autoridad administrativa para una fecha en la que la acción de despido injustificado habrá caducado. Tal interpretación deja al trabajador, en los hechos, sin recurso judicial alguno, impidiéndole someter al conocimiento del tribunal especializado sus legítimas pretensiones derivadas del término de una relación de naturaleza laboral.

Octavo: Que no debe olvidarse que, en materia laboral, las normas procesales deben ser comprendidas integrando de manera concreta los principios inspiradores que justifican la existencia de tal disciplina, y uno de los basamentos sensibles en este asunto, dice relación con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, como consecuencia evidente del reconocimiento constitucional de lo que la doctrina y el derecho nacional y comparado denomina como derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto fundamento esencial de todo Estado de Derecho, que se encuentra garantizado a nivel



constitucional mediante el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al reconocer la prerrogativa universal de igual protección de la ley, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, y a un justo y racional procedimiento, garantía que, además, tiene como contrapartida orgánica, los principios rectores de la actividad jurisdiccional consagrados en el artículo 76 del texto constitucional, específicamente el de inexcusabilidad, que impone a la magistratura el deber imperativo de otorgar un pronunciamiento de mérito sobre la controversia que legalmente se le plantee, sin poder excusarse de hacerlo.

Noveno: Que, para resolver, se debe tener en consideración que el inciso 2° del artículo 498 del Código del Trabajo dispone que *"sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título"*.

Décimo: Que, de este modo, toda interpretación que limite de alguna manera el acceso a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial de fondo que adjudique un derecho dubitado, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, máxime en el contexto del Derecho del Trabajo por la especial relevancia que su rol protector impone, debe en lo posible evitar salidas incidentales que impidan un pronunciamiento de mérito.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, **se acoge el recurso de queja** interpuesto en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Concepción ministros señor Jame Solis Pino y señoras Vivian Toloza Fernández y Verónica Esquerré Pavón, **se dejan sin efecto** las resoluciones de cuatro de marzo y veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictadas por la Corte de Apelaciones de Concepción y por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma



ciudad, respectivamente, en cuanto determinan no admitir a tramitación la demanda presentada por doña Patricia Cisternas Muñoz de conformidad al procedimiento de aplicación general, y, en su lugar, se dispone que el tribunal de base le dará curso de conformidad al procedimiento ordinario establecido por la ley.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al tribunal pleno, por no haber mérito bastante para ello.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 8.413-22

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y los abogados Integrantes señor Eduardo Morales R., y señora Pía Tavolarí G. No firma la Ministra señora Gajardo y el abogado integrante señor Morales, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios la primera y por estar ausente el segundo. Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.



TTCNZRBQXX

En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

